



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-012-2018-0498
Demandante:	Carlos Alberto Diaz Hurtado
Demandado:	Colpensiones
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia	Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	PENSION VEJEZ, REGIMEN DE TRANSICIÓN ACTO LEGISLATIVO

Medellín, julio trece (13) de dos mil veinte (2020)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, procede, de conformidad con el artículo 15 del decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte accionante, respecto a la sentencia proferida el 27 de febrero de 2020, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor CARLOS ALBERTO DIAZ HURTADO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Radicado 05001-31-05-012-2018-0498-01

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor CARLOS ALBERTO DIAZ HURTADO, por conducto de profesional del derecho, instauró ante los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín, demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo el régimen de transición, con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.

Como supuestos fácticos para apoyar las anteriores pretensiones, se indica en síntesis, que el demandante, nació el 16 de abril de 1959, registrando aportes en pensión al Seguro Social, desde el año 1974, cuando tenía 16 años, que actualmente registra 2068 semanas cotizadas, que el demandante es beneficiario del régimen de transición y tenía más de 750 semanas cotizadas al mes de abril de 2005, que Colpensiones ha resuelto negativamente la solicitud de pensión de vejez, mediante la resolución SUB 97879 del 09 de abril de 2018.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente COLPENSIONES responde el escrito impulsor, manifestando frente a los hechos que es cierta la edad del demandante y el número de semanas cotizadas 2063, como la reclamación administrativa, pero afirma que el demandante no cumple con los requisitos legales, pues el status de pensionado solo se adquiere al coincidir el número de semanas cotizadas con la edad, conforme al artículo 9 de la ley 797 de 2003.

Para enervar las pretensiones formula las excepciones bajo la denominación de: inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez bajo el régimen de transición; inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993; imposibilidad de condena en costas; prescripción, buena de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas y la excepción genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, profiere fallo el día veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020), por medio del cual DECLARO PROBADA la excepción de Inexistencia de la Obligación, ABSOLVIO a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES de las pretensiones de la demanda instaurada en su contra por el señor CARLOS ALBERTO DIAZ HURTADO y condenó en costas al actor.

1.4. RECURSO DE APELACION

La señora apoderada judicial del accionante interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, argumentando que el régimen de transición para su representado, no está sujeto al requisito de la edad, porque la norma indica que se puede acceder al mismo cumpliendo uno solo de los requisitos y el demandante ha cumplido con los aportes exigidos por la norma, para el año 1994, para el año 2010 y para el año 2014.

Afirma que el demandante ha cotizado más de 2089 semanas y ha condensado un capital importantísimo que tiene Colpensiones y supera los 150.000.000 de pesos, por lo que sólo con los intereses producidos por ese capital, al demandante se le podría reconocer una pensión del salario mínimo, equivalente a 877.803 pesos; asegura que el demandante ve afectado su patrimonio y que esa conversión a semanas se da en detrimento del demandante, exigiéndole más tiempo de cotización con fundamento en leyes posteriores. Aduce que el demandante tiene un derecho fundamental que debe ser protegido por los jueces, pues, pese a haber cotizado por más de 40 años se le impide el disfrute de la pensión, lo cual insiste, no tiene sentido, dado que la pensión podría financiarse incluso con los intereses que produce el capital acumulado.

1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad procesal para formular alegaciones, se pronunció la señora apoderada de COLPENSIONES solicitando Confirmar la decisión adoptada

por el fallador de Primera Instancia, teniendo en cuenta que el demandante, si bien acredita el requisito de semanas cotizadas, dado que al 31 de Diciembre de 2014 cuenta con 1.900,58 semanas, no cumple con la edad mínima requerida, puesto que la edad exigida en el Decreto 758 de 1990 (60 años), el accionante solo la cumplió hasta el 17 de Abril de 2019, fecha para la cual ya había expirado la extensión del régimen de transición contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, motivo por el cual, improcedente sería acceder al reconocimiento pensional bajo los lineamientos del Decreto 758 de 1990, por ir en contravía del ordenamiento legal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos resueltos, de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

Se encuentra que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

-Que el señor CARLOS ALBERTO DIAZ HURTADO nació el 17 de abril del año 1959, cuenta actualmente con 61 años de edad, conforme se acredita con la copia de su cédula de ciudadanía. (fl 14)

-Que mediante Resolución SUB91879 del 09 de abril de 2018, Colpensiones negó la pensión de vejez al demandante., al no cumplir con la edad mínima pensional (fl 41 al 43)

-Que el señor CARLOS ALBERTO DIAZ ZULUAGA ha cotizado al Sistema General de Pensiones un total de 2105.71 semanas, entre el 01 de julio de 1974 y el 13 de diciembre de 2018, fecha en la cual registra novedad de retiro. (folios 112 a 129)

2.3. PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

El problema jurídico a resolver, conforme a los planteamientos del recurso de apelación los son establecer

¿Si el demandante es beneficiario del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el decreto 758 de 1990, verificando si el mismo, requiere acreditar con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, el requisito de la edad pensional para causar el derecho a la prestación económica de vejez, atendiendo a la densidad de semanas cotizadas y el capital que estas representan?

2.4. TESIS

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual el demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el régimen de transición, atendiendo a que el régimen de transición feneció el 31 de diciembre de 2014, fecha para la cual el actor no había cumplido la edad mínima pensional y por lo tanto la sentencia debe ser CONFIRMADA.

2.5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Con la entrada en vigencia de las nuevas reglas pensionales establecidas en la Ley 100 de 1993, el legislador previó un régimen de transición, como excepción al principio de vigencia inmediata de la ley, buscando así proteger aquellas personas que por su proximidad a adquirir el derecho pensional contaban con una expectativa legítima a conservar las reglas del régimen anterior al cual pertenecían.

Es así como el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

“...La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados...”

Es de la esencia del régimen de transición su carácter temporal, de ahí que el legislador a través del acto legislativo 01 de 2005, en su parágrafo transitorio 4º estableció:

“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.

En la norma constitucional, se instituye un límite temporal en la aplicación del régimen transición, bajo dos reglas; la primera, la vigencia del mismo hasta el 31 de julio de 2010 y la segunda, su extensión hasta el 31 de diciembre de 2014, para aquellos afiliados que a la fecha de promulgación del referido acto

legislativo, 29 de julio de 2005, acrediten tener cotizadas 750 semanas; feneciendo, en todo caso, este régimen de excepción, el 31 de diciembre de 2014, luego de 20 años y 9 meses de su vigencia, término que para el constituyente derivado, resulta suficiente para que quienes tenían una expectativa legítima a la aplicación de normas precedentes consolidaran su derecho.

La citada preceptiva, deja a salvo los derechos adquiridos, esto es el derecho pensional de quienes hubiesen cumplido los requisitos del régimen anterior, aplicable por transición, con anterioridad a la terminación definitiva de este régimen el 31 de diciembre de 2014, por el contrario, aquellas personas que cumpliendo uno de los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición, no cumplieron con la edad o el número de semanas del régimen anterior al cual pertenecían, antes de la pluricitada fecha, no tienen un derecho adquirido.

Respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de la disposición, de cara a los fines constitucionales perseguidos con la reforma, entre ellos garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en las sentencias T788 de 2012 y T 475 y T892 de 2013, T754 de 2014 y T631 de 2016. Igualmente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha consolidado una línea jurisprudencial en torno al tema, que se integra, entre otras, por las sentencias SL 19568 de 2017, SL 4285 de 2018, SL841 de 2019, SL4602 de 2019, SL227 de 2020, SL 541 de 2020, SL669 de 2020 y SL670 de 2020.

En la sentencia SL541 del 19 de febrero de 2020, la citada Corporación precisó

“En cuanto al primer aspecto, que controvierte el impugnante y que se ha descrito con precedencia, debe destacar la Sala que la pérdida del régimen de transición con ocasión a la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, implicó para la demandante el

incremento de la edad y el tiempo cotizado como requisitos para acceder a la pensión de vejez, resulta suficiente señalar que tal situación no comporta una transgresión a las normas denunciadas en los cargos, pues lo cierto es que como quedo visto la reforma constitucional, no desconoció ningún derecho adquirido por la actora, puesto que esta solo ostentaba una simple expectativa, que puede ser objeto de modificación por el legislador, de acuerdo con la libertad de configuración que le otorga la Constitución Política y; además, porque aquella no supuso una modificación intempestiva, sino que por el contrario, otorgó la posibilidad a aquellos asegurados que tenían la expectativa legítima de pensionarse en el periodo que consagró, y de acuerdo a las reglas que allí fijó, de conservar los beneficios que las normas anteriores al referido Acto Legislativo les otorgaban para acceder a esa prestación.

En la misma dirección se pronunció en la sentencia SL 670 del 24 de febrero de 2020:

“No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Según lo dicho, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido; esa situación corresponde, por el contrario, a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema. (...)

“Ahora bien, la tesis propuesta por la recurrente en aras de inaplicar el parágrafo 4.º del Acto Legislativo 01 de 2005, carece de prosperidad porque se trata de una norma de rango supralegal; tampoco es viable aducir excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Constitución y, además, porque esa reforma constitucional no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; por el contrario previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.

2.6. CASO CONCRETO

En el presente caso, no se discute que el accionante a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, era beneficiario del régimen de transición pensional, dado que, aunque no contaba con 40 años de edad al 01 de abril de 1994, por haber nacido el 17 de abril de 1959, si acreditaba 15 años de servicios cotizados, registrando un total de 905.96 semanas. Sin embargo, como lo analizó el juez de instancia y lo reitera la apoderada de Colpensiones en los alegatos de segunda instancia, la edad mínima pensional de 60 años, prevista en el régimen anterior, decreto 758 de 1990, solo la cumplió para el 17 de abril de 2019, lo que significa que no alcanzó a consolidar su derecho antes de la extinción del régimen de transición, quedando cobijado por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.

Es menester apuntar, que el demandante solo tenía una expectativa legítima a ser pensionado bajo el régimen anterior y no un derecho adquirido y por ende su situación podía ser objeto de modificación normativa, no sin advertir que el demandante al 01 de abril de 1994, a pesar de ser beneficiario del régimen de transición, realmente no se encontraba próximo a adquirir el derecho pensional, pues contaba con 34 años de edad, faltándole 26 años para cumplir la edad mínima pensional, contando solo con una expectativa que podía ser modificada, como, en efecto, lo hizo el legislador a través del acto legislativo 01 de 2005.

Finalmente en cuanto al argumento presentado por la apoderada judicial del actor en su recurso, relativo al detrimento patrimonial sufrido por el demandante por la densidad de cotizaciones efectuadas y el capital que las mismas representa, debe señalarse, en primer lugar, que al demandante solo se le exigen 1300 semanas de cotización para la causación del derecho y las semanas adicionales tiene por finalidad, aumentar de tasa de reemplazo, hasta llegar a un límite del 80%, conforme al artículo 34 de la ley 100 de 1993; razón por la cual el demandante de acuerdo con el artículo 17 de la ley 100 de 1993, podía suspender el pago de cotizaciones, como efecto lo hizo al 31 de diciembre de 2018 y en segundo lugar, que la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media, no se rige por el capital acumulado como sí en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, siendo claro que no está probado que el capital que pueda representar las 2105 semanas cotizadas por el actor sea suficiente para el autofinanciamiento de la pensión a que tendría derecho el accionante, de acuerdo con las distintas variables financieras; de no ser así, por el contrario, el sistema debe subsidiar el faltante para garantizar una pensión vitalicia al mismo y a sus eventuales beneficiarios.

En consecuencia, resulta procedente CONFIRMAR el fallo del funcionario de primer grado, imponiendo costas en esta instancia a cargo del demandante

3. DECISION

En armonía con lo expuesto, La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- SE CONFIRMA la sentencia proferida el 27 de febrero septiembre de 2020 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso

ordinario laboral instaurado por el señor CARLOS ALBERTO DIAZ HURTADO en contra de COLPENSIONES.


2.- **COSTAS** en esta instancia a cargo de la parte demandante, inclúyanse como agencias en derecho la suma de 877.803 pesos.

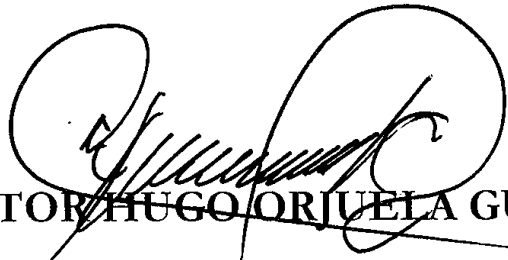
3.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Del fallo anterior quedan las partes notificadas por ESTADOS, de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente sentencia fue notificada por estado No. 090 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 14 de julio de 2020.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario